

Modelo de crecimiento, paro y exclusión social

Las características profesionales y formativas de la población en edad de trabajar en el conjunto del Estado han sufrido profundas y positivas transformaciones en los últimos años, destacando el mayor grado de preparación técnica de la población activa, gracias a la incorporación al mercado de trabajo del colectivo menor de 30 años y a la masiva participación de las mujeres

Salce Elvira

Miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CC.OO.

Paralelamente se han venido produciendo una serie de cambios legislativos y de organización del trabajo: precarización, descentralización productiva, subcontratación, etc., con repercusiones importantes en la composición de los asalariados y asalariadas.

Con relación a lo primero, si en 1987 más del 57% de la población ocupada era analfabeta o con estudios primarios, en 1990 este colectivo se ha reducido a menos de la mitad: 25,29%. Merece destacar el aumento en el mismo periodo de un 140% de personas con enseñanzas técnico profesionales, concentradas en el colectivo menor de cuarenta años, y especialmente en los menores de 30 años.

Este importantísimo avance en las cualificaciones de la población activa no está teniendo su reflejo en una mejora de las condiciones de trabajo en general y muy en particular de los colectivos de nueva incorporación al mundo laboral.

A pesar del sustancial crecimiento económico de los últimos años, el paro –12,96%– sigue siendo la asignatura pendiente del Gobierno del PP, afectando al 19% de las mujeres y el 25% de los jóvenes, con las consecuencias sociales de todos conocidas. Lo más preocupante es que esta situación se da con una tasa de actividad femenina muy por debajo de la media europea, y 24 puntos inferior a la de los hombres.

La precariedad en el empleo es otra de las lacras de nuestro mercado de trabajo. Afecta al 31,5% de las personas asalariadas, duplicando la media europea, sin que las reformas sucesivas (pactadas o impuestas) hayan conseguido disminuir esta cifra significativamente, siendo nuevamente los jóvenes y las mujeres los que la sufren de forma más dramática. Así, el 83% de las personas menores de 20 años y el 63% de entre 20 y 24 años tienen un contrato temporal.

Las consecuencias de esta situación, además de la inseguridad en el futuro, el sometimiento casi absoluto a las decisiones del empresario de turno o las dificultades de sindicación, es la menor cobertura en caso de desempleo, I.T., etc., pues difícilmente se consiguen los doce meses de cotización mínimos necesarios para tener derecho a percibir la prestación contributiva; de ahí que solamente la mitad de las personas paradas registradas en el INEM perciben algún tipo de prestación, que se reduce a 30% en los menores de 25 años.

Esta deficiente protección a las personas desempleadas es la causa de que en los últimos dos años el superávit en las cotizaciones del INEM alcance el billón de pesetas. Las cuotas

están siendo destinadas, en lugar de atender su objetivo, a otros menesteres, para conseguir el famoso “déficit cero”.

Recordamos que la exclusión social representa a los 502.200 hogares que, a pesar del crecimiento económico, tienen a todos sus miembros en paro y ello después de que las estadísticas oficiales hayan endurecido los requisitos para calificar a una persona de parada. Se calcula que, con los nuevos criterios de la Encuesta de Población Activa, “desaparecen” 344.660 parados y paradas (por ejemplo, la preparación de unas oposiciones, sin tener trabajo, es causa de exclusión de las cifras del paro). El paro, la desregulación y segmentación del mercado de trabajo y la proliferación de los empleos precarios y descalificados, ocupados en muchos casos por jóvenes con titulaciones muy superiores a las requeridas para el puesto en cuestión, han provocado un aumento de la dispersión salarial y el consiguiente incremento de la desigualdad. En definitiva, una gran parte de los cambios profundos que se están produciendo en el modelo socioproductivo, significa una renovación en los valores, prácticas y finalidades del capitalismo teniendo por objetivo provocar el debilitamiento de las instituciones representativas de los trabajadores, la devaluación del factor trabajo y recortes en todo lo público, para aumentar los beneficios empresariales y darles un poder casi hegemónico en las relaciones de producción.

Desde el sindicalismo tenemos el importante reto de avanzar en propuestas, elaboradas con la máxima participación social, que permitan enfrentarnos a este juego salvaje de la competitividad e impedir la creación de nuevas zonas excluyentes para las personas más débiles. Debemos rebelarnos contra esa “desigualdad aceptable” que se nos impone como lo único posible y cuestionar este modelo social insolidario, aunque haya que enfrentarse a ese coro de falsos teóricos dedicados a poner letra a la música de los poderosos y que al final son los que hacen el trabajo sucio necesario, para, como ha escrito el gran economista John Galbraith, “los disparates de los ricos pasen en este mundo por sabios proverbios”, máxime cuando la injusticia y desigualdad conviven con unas insospechadas posibilidades de creación de riqueza.